

Dependencia: Sala de Regidores "A"
 Oficio No. SR/067/2016
 Asunto: Se remite Iniciativa.



El Puerto
Que Queremos

Calle Independencia #123,
 col. Centro, C.P. 48300

01(322) 22 32500 / 1788 000

arturo.davalos@puertovallarta.gob.mx

www.puertovallarta.gob.mx

**MTRO. VICTOR MANUEL BERNAL VARGAS
 SECRETARIO GENERAL
 PRESENTE.**

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez remitir a Usted, Iniciativa de Creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, así como su Reglamento Orgánico.

Dicho lo anterior, solicito de su apoyo para que dicha iniciativa, sea agendada en la próxima sesión ordinaria de Ayuntamiento.

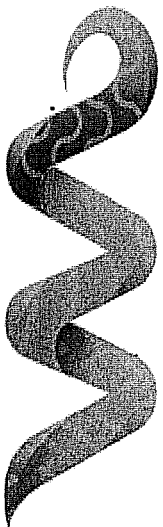
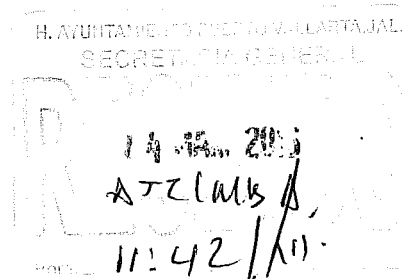
Sin más por el momento, quedo de Usted a sus apreciables órdenes, para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco a 14 de Marzo 2016.

**C. BELLANNI FONG-PATIÑO
 REGIDORA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ECOLOGIA.**

EMMM/Ifn
 C.c.p. Archivo



Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

PRESENTE.

La que suscribe Regidora Bellanni Fong, integrantes del Honorable Cuerpo Edilicio, de este H. Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º. 17, inciso a) de la fracción II del artículo 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77, fracción II, inciso a), fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 1º., 2º., 3º., 37, fracciones II, X y XVII, 38 fracción IV, 40, 41, fracción II, 42 fracción VI, 50 fracción I, 140, 148, 149, 150, 151 y 152 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 1º., 2º., del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, presento **iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño, de acuerdo con la siguiente:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A. Sobre la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa

El veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el Honorable Congreso de la Unión, publico en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas y modificaciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Segundo Transitorio del decreto de reformas.

El artículo 115 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, señala:

“ARTÍCULO 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I....

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

...

II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio "conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre

dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución.

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;

...

IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor "de los inmuebles;

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones;

b) Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los Estados; y

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.

Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de "la tierra urbana;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán

los reglamentos y "disposiciones administrativas que fueren necesarios.

VI a VIII. ..."

Del numeral transcrito, destaca lo siguiente:

1) Que las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

2) Que los Municipios manejarán su patrimonio, de acuerdo a la ley.

3) Que los Municipios tienen facultades para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, sujetándose para ello a las leyes que, en materia municipal, expidan las legislaturas locales

4) Que el objeto de las leyes que expidan las legislaturas, tratándose de la materia municipal, será establecer:

- Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

- Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.
- Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren las fracciones III y IV del propio precepto 115, y la fracción VII del artículo 116, ambos de la Constitución Federal.
- El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir convenio, la legislatura considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos;
- Las disposiciones aplicables en los Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

5) Que las legislaturas deben expedir normas que establezcan los procedimientos para resolver los conflictos entre los Municipios y el gobierno del Estado o entre aquéllos, con motivo de los casos previstos en los incisos c) y d) de la fracción II del artículo 115 constitucional.

6) Que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

7) Que las legislaturas estatales aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

8) Que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

9) Que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

De lo anterior se concluye que, a partir de la aludida reforma al artículo 115 constitucional, los Municipios están investidos de diversas facultades dentro de su jurisdicción, a fin de dotarlos de autonomía en su ámbito competencial, empero para llevar a cabo sus facultades se encuentran sujetos a las leyes que en materia municipal emitan las legislaturas estatales, mediante las cuales, además se establecerán las bases generales de la administración pública municipal.

Asimismo, los artículos primero y segundo transitorios del Decreto por el que se reformó el numeral 115 de la Constitución Federal, publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, señala:

“ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos siguientes.”

“ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de abril del año 2001.

En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán "aplicando las disposiciones vigentes."

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Del segundo de los preceptos transcritos se desprende, en lo que nos interesa, es la obligación de los Estados para que a más tardar en un año a partir de la vigencia de la reforma constitucional, adecuen sus constituciones y leyes y que, en tanto se realizan tales adecuaciones, continúen aplicando las disposiciones vigentes.

Así, considerando que en términos del artículo primero transitorio del Decreto mencionado, las reformas de que se trata entraron en vigor noventa días después de su publicación, es decir, el veintidós de marzo de dos mil, el plazo para la adecuación de las leyes locales feneció el veintiuno de marzo de dos mil uno.

El Honorable Congreso del Estado de Jalisco con fecha nueve de diciembre del 2008 mediante su ***DECRETO NÚMERO 22550/LVIII/08.-Reforma el nombre y los artículos 1º. y 2º. de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, y se adicional el Título Undécimo, dos capítulos y los artículos 148, 149, 150, 151, 152 y 153 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco.-Dic. 9 de 2008. Sec. VI.***

Dicho decreto creo el Título Undécimo y los artículos en mención los que quedaron de la siguiente manera:

TÍTULO UNDÉCIMO
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I
De los Principios Generales

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Artículo 148. La administración pública municipal actuará sometida al ordenamiento jurídico, debiendo asegurar la igualitaria participación de los administradores y la publicidad de las actuaciones.

La Ley del Procedimiento Administrativo del estado de Jalisco será de aplicación supletoria al ámbito municipal, y se aplicará totalmente en todos aquellos municipios que no expidan los reglamentos que regulen los actos y procedimientos administrativos municipales.

Artículo 149. El acto administrativo municipal es toda manifestación unilateral y externa de la voluntad, emitida por el ayuntamiento, sus integrantes o sus dependencias representativas, que crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones de acuerdo con las atribuciones y competencias de orden público que les son otorgadas por las leyes y los reglamentos.

El acto administrativo municipal se sujetará a las reglas y disposiciones del Título Primero y del Título Segundo de la Sección Primera de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

CAPÍTULO II

De los Medios de Defensa

Artículo 150. Los ayuntamientos instituirán en su reglamentación, con sujeción a los principios establecidos en el presente capítulo, **los recursos y procedimientos jurídicos que establezcan los medios de defensa a favor de los administrados,** en contra de actos administrativos emitidos por las autoridades municipales, que aquellos consideren han afectado su interés jurídico.

Artículo 151. Los ayuntamientos instituirán en su reglamentación y presupuesto **al funcionario, dependencia u órgano municipal con autonomía y definitividad en sus resoluciones, encargado de radicar y resolver las**

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

inconformidades planteadas por virtud de los actos a que se refiere el artículo anterior. Dicho funcionario, dependencia u órgano funcionará en régimen de única instancia y sus resoluciones serán definitivas.

Artículo 152. Los municipios, por conducto del Síndico, **podrán invocar la instauración del procedimiento de lesividad ante la autoridad jurisdiccional competente**, solicitando la declaración de nulidad de resoluciones administrativas favorables a los particulares, cuando se considere que éstas lesionan el interés público de la comunidad. **La autoridad jurisdiccional correspondiente substanciará dicho procedimiento en la vía sumaria.**

De lo anterior se observa que el Congreso del Estado llevo a cabo las modificaciones que ordenaba la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos después de siete años.

Es por ello que en términos, de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que establece la supremacía constitucional, y en conjunto con lo dispuesto por el artículo 128 de dicho ordenamiento supremo relacionado con la protesta constitucional, de guardar y hacer guardar la Constitución a que todos los servidores públicos estamos obligados de respetar, me permito proponer la presente la presente iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal así como su Reglamento Orgánico para su funcionamiento y operación.

Antecedentes

La reforma constitucional al artículo 115, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 23 de diciembre de 1999, enunció que en las leyes en materia municipal, expedidas por las legislaturas locales, uno de sus objetos sería el incluir "los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad". En este artículo indagamos sobre la justicia administrativa instaurada en los municipios mexicanos.

Entidades federativas con algún modelo de justicia administrativa municipal

A) Baja California

B) Nuevo León

C) Durango

D) Guanajuato, y

E) Yucatan.

El texto original del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero del 1857, publicado en el número 30 del tomo V, 4ª época, del *Diario Oficial de la Federación* (en adelante, DOF) del lunes 5 de febrero de 1917, establecía textualmente:

TÍTULO QUINTO

DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial, y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

II. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas de los estados y que, en todo caso, serán las suficientes para atender a sus necesidades.

III. Los municipios serán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales.

El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza pública en los municipios donde residieren habitual o transitoriamente. Los gobernadores constitucionales no podrán ser reelectos ni durar en su encargo más de cuatro años.

Son aplicables a los gobernadores, substitutos o interinos, las prohibiciones del artículo 83.

El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno, pero, en todo caso, el número de representantes de una legislatura local no podrá ser menor de quince diputados propietarios.

En los estados, cada distrito electoral nombrará un diputado propietario y un suplente.

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con vecindad no menor de cinco años, inmediatamente anteriores al día de la elección.

Como puede apreciarse, nada disponía el artículo constitucional de 1917 sobre los medios de impugnación que contra los actos administrativos dictados por las autoridades municipales procedieran; sin embargo, con el pasar del tiempo el artículo 115 fue transformándose producto de las trece reformas que, a partir del 20 de agosto de 1928 y hasta la última del 24 del mismo mes de 2009, fueron practicándosele.³ Particularmente interesa para el objeto de esta investigación la décima reforma publicada en la primera sección del DOF del jueves 23 de

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

diciembre de 1999, porque se introdujo, por vez primera, el tema de los medios de impugnación y de los órganos para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.

En la *Gaceta Parlamentaria* de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión del 15 de junio de 1999 aparece el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometido al Pleno del Congreso; el cual fue producto de nueve iniciativas presentadas por diversos diputados federales a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento Municipal de la Cámara de Diputados, desde el 23 de octubre de 1997 y hasta el 26 de mayo de 1999. Concretamente, en la cuarta iniciativa —presentada el 31 de marzo de 1999 por diputados del Partido Acción Nacional— se propuso lo relativo a la regulación del procedimiento administrativo respetuoso de las garantías de igualdad, transparencia, audiencia, defensa y legalidad, acordando la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en su dictamen, que las leyes estatales en materia municipal contemplarán el procedimiento administrativo sujeto a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; principios que también regirían para los medios de impugnación y para los órganos encargados de resolver las controversias que surgieran entre la administración pública municipal y los particulares, sin que se especificara en el documento cuál sería la naturaleza jurídica de unos y otros.⁴ Así entonces, el texto vigente del artículo 115 constitucional, en la parte que interesa analizar, es el que sigue:

TÍTULO QUINTO

DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división

territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

[...]

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.

Es válido afirmar que al amparo del texto constitucional las entidades federativas pueden contemplar en sus leyes regulatorias de la materia municipal una variada posibilidad de alternativas para resolver las controversias administrativas, como: los recursos administrativos y las autoridades integrantes de la propia administración pública encargadas de sustanciarlos —que sería la vía tradicionalmente empleada—, o bien, explorar el campo del contencioso administrativo municipal, normando *en ley los procesos y los tribunales administrativos*. De hecho, con la gran apertura que ofrece el texto fundamental, la mayoría de las entidades federativas —veintiséis— ha optado por el camino de los

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

recursos administrativos y sólo cinco han previsto abiertamente algún modelo de jurisdicción especializada, como se abundará a continuación.

De las entidades federativas mencionadas con antelación solo en Baja California se ha implementado de forma implementación del contencioso administrativo, siendo los pioneros en este sistema se justicia Municipal.

De los cinco municipios en que se divide Baja California, sólo Tecate y Tijuana han expedido sus reglamentos del contencioso administrativo municipal.

En Tecate, el Reglamento para la Administración de Justicia para el Municipio de Tecate hace alusión a la Junta Municipal de Controversias, tribunal contencioso administrativo desconcentrado del presidente municipal, formado colegiadamente por tres jueces y tramitador de un recurso administrativo de revisión.

Por lo que respecta a Tijuana, el Reglamento de Justicia para el Municipio de Tijuana, Baja California, instituye al Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal, a los jueces municipales y al Juzgado Integral Municipal. En la inteligencia que el Tribunal Unitario Administrativo de referencia no reúne los requisitos para ser verdaderamente un Tribunal Contencioso Administrativo al depender la designación de titular del presidente Municipal.

Sobre este punto en particular el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en tesis aislada, ha concluido respecto al Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana lo siguiente:

TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. NO PUEDE CONSIDERARSE 'TRIBUNAL ADMINISTRATIVO' PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Conforme a la jurisprudencia P./J. 26/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 20, para

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

que una autoridad administrativa, al realizar funciones jurisdiccionales, tenga la naturaleza de tribunal administrativo y, por ende, sus resoluciones sean reclamables en amparo uniinstancial, se requiere: a) Que sea creado, estructurado y organizado mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las legislaturas locales; b) Que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar con el fin de garantizar su imparcialidad e independencia; y, c) Que su función sea la de dirimir conflictos suscitados entre la administración pública y los particulares. En congruencia con lo antes expuesto y del análisis de las disposiciones relativas de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, así como del Reglamento de Justicia para el Municipio de Tijuana, se concluye que el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de esa ciudad no tiene el carácter de 'tribunal administrativo' para efectos de la procedencia del amparo directo en contra de sus resoluciones, puesto que su creación, estructura y organización no están previstas en ley, sino en el citado reglamento expedido por el Ayuntamiento de Tijuana; además, en su integración y funcionamiento no es autónomo, ya que los jueces son designados por el Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal; tampoco se encuentra garantizada la permanencia de los juzgadores municipales, dado que durarán en su encargo el tiempo que constitucionalmente permanezca el Ayuntamiento que los nombró, y pueden ser removidos en cualquier momento por causa grave a juicio del propio Ayuntamiento. En consecuencia, el amparo promovido contra los fallos definitivos dictados por dicho órgano municipal debe tramitarse en la vía indirecta ante el juez de distrito.

Analizando a los tratadistas especializados en la justicia contenciosa administrativa municipal, nos hemos basado en el estudio realizado por el Maestro **Mauricio Yanome Yesaki**, de donde hemos tomado los puntos mas sobresalientes e importantes de su estudio para el presente proyecto de iniciativa.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Para conceptualizar la acepción "*tribunal administrativo*", conviene recordar que tampoco en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe una definición formal, no obstante, sí existen elementos que permiten definirlo y que son esenciales.

Tradicionalmente los tribunales, se han identificado como órganos pertenecientes al Poder Judicial, sin embargo, la propia Carta Magna, en los numerales 73, fracción XXIX-H, 115, fracción II, inciso a) 116, fracción V, y 122, Base Quinta, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoriza a los órganos de gobierno, con facultades para legislar, para que puedan crear tribunales administrativos.

Lo anterior es así, pues siguiendo lo resuelto en la sentencia de fecha 25 de agosto de 2004, relativa al amparo en revisión número 2444/2003, promovido por José Enrique Corella Gordillo, el Ministro Ponente Juan N. Silva Meza sostuvo, que:

Es verdad que en términos del artículo 17 de la Carta Magna, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Empero, de este precepto no se desprende que los órganos pertenecientes al Poder Judicial son los únicos encargados de administrar e impartir justicia, ni que los organismos que formalmente son integrantes del Poder Ejecutivo tienen impedimento para sustanciar procedimientos administrativos y emitir resoluciones o fallos.

Tanto es así que en el artículo 73, fracción XXIX-H de la propia Constitución, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, que no pertenecen al Poder Judicial, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

para establecer las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

En esas condiciones, es incuestionable que la garantía de la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, que radica en el derecho público subjetivo que todo gobernado tiene en los términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a obtener el servicio público de administración e impartición de justicia, está a cargo del Poder Público del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, mas no únicamente a cargo de este último, como una correlativa obligación de instituir la administración de justicia con el carácter de servicio público, para lo cual debe crear tanto los tribunales como los demás organismos que por razones de economía, prontitud y especialización material, coadyuven en la tarea de administrar justicia.

Es por ello que aún cuando no forman parte del Poder Judicial Federal existen en el sistema jurídico nacional varios organismos que participan en tareas jurisdiccionales, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Superior Agrario, el Supremo Tribunal Militar, entre otros.

De lo expuesto en los párrafos que anteceden se deduce que la administración e impartición de justicia que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, puede llevarse a cabo por órganos del Estado que aunque no son formalmente integrantes del Poder Judicial, están en aptitud de realizar actos en sentido material e intrínsecamente jurisdiccionales, sin importar que el órgano estatal que los realice pertenezca al Poder Legislativo, al Poder Judicial, o al Poder Ejecutivo, siempre y cuando la ley les autorice la realización de esta actividad.

En síntesis, el artículo 17 en armonía con los numerales 73, fracción XXIX-H, 115, fracción II, inciso a) 116, fracción V, y 122, Base Quinta, todos ellos de la

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permiten el establecimiento de los órganos jurisdiccionales denominados "tribunales administrativos" los cuales deberán reunir las mismas características apuntadas en el apartado que antecede para los "tribunales", sin embargo, se exige, entrándose de *"tribunales administrativos municipales"*, además de los anteriores, el que las legislaturas locales en las leyes que en materia municipal expidan, establezcan las bases generales para su existencia; es decir, bastará con que dicha ley previera su existencia, sin necesidad de que se detallara su estructura y organización, puesto que el funcionamiento de tales tribunales, será regulado mediante la aprobación del reglamento municipal respectivo.

A esta conclusión, se llega de la lectura de la interpretación realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al contenido del inciso a) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la sentencia fallada en sesión del 22 de octubre del 2004, al resolver la contradicción de tesis 147/2004 entre las suscitadas entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito con residencia en la Ciudad de Tijuana Baja California, la cual en la parte conducente señaló:

Que las Legislaturas de los Estados tienen la obligación de expedir leyes con el objeto de establecer:

- Las bases generales de la administración pública municipal; y,
- Las bases generales *"del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad."*

Debiendo quedar precisado, que el Legislador al modificar el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal de la República, tuvo la intención de otorgar

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

a los ayuntamientos, facultades amplias para normar en forma directa y espontánea las materias de su competencia, así como los procedimientos y servicios necesarios para ello, esto es, como *"el procedimiento contencioso administrativo"*, como se infiere de la exposición de motivos relativa, que en lo conducente, dice:

a) Los ayuntamientos poseerán facultades para expedir bandos de policía y buen gobierno, reglamentos que regulen la organización de la administración pública municipal, el funcionamiento de sus órganos administrativos, desconcentrados y descentralizados, la distribución de competencias y facultades entre las dependencias y el nombramiento de sus titulares; así como aquellos que sean necesarios para normar las materias, procedimientos y servicios de su competencia; circulares y disposiciones de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

b) Las legislaturas expedirán las bases normativas conforme a las cuales los municipios ejercerán las facultades que esta constitución les confiere, limitándose al establecimiento de principios generales de procedimiento administrativo, garantizando los principios de igualdad, transparencia, audiencia y defensa y de legalidad, de acuerdo con la ley que para tal efecto deberán establecer las legislaturas de los estados.

LOS REQUISITOS DE EXISTENCIA DE LOS TRIBUNALES MUNICIPALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Lo expuesto en la parte final del apartado anterior, en relación, con la interpretación constitucional, realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 18/97 sustentada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Noveno Circuito con residencia en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, dictada en fecha 04 de noviembre de 1997, mediante la cual estableció las notas distintivas de los tribunales de lo

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

contencioso administrativo, permiten conocer todos y cada uno de los requisitos de existencia que deben contener los órganos jurisdiccionales municipales de lo contencioso administrativo en México, para que las sentencias que dichos tribunales emitan sean revisadas en alzada a través del amparo directo o uniinstancial. Para una mejor comprensión, se estima oportuno transcribir la jurisprudencia, nacida con motivo de aquella contradicción, la cual señala a la letra, lo siguiente:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. SUS NOTAS DISTINTIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. Los artículos 73, fracción XXIX-H, 116, fracción V, y 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultan al Congreso de la Unión, a las Legislaturas Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respectivamente, para crear tribunales de lo contencioso-administrativo con plena autonomía para dictar sus fallos. De conformidad con esas normas supremas, para que una autoridad administrativa, al realizar funciones jurisdiccionales, tenga la naturaleza de tribunal administrativo y, por ende, sus resoluciones sean susceptibles de reclamarse en amparo uniinstancial, se requiere: a) Que sea creado, estructurado y organizado mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas Locales; b) Que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar con el fin de garantizar su imparcialidad e independencia; y c) Que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. IUS 2005. Núm. de Registro 196,515.

En mérito de todo lo antes expuesto, para los efectos de este estudio; es decir, para los tribunales municipales de lo contencioso administrativo, se consideran requisitos constitucionales las características que deben reunir los órganos jurisdiccionales encargados de impartir la justicia administrativa municipal para que sean considerados verdaderos tribunales, siendo éstos los siguientes:

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

primero, que sea creado, estructurado y organizado por las constituciones locales y las leyes expedidas por las legislaturas de los Estados;

segundo, que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía para fallar y

tercero, que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares, en tanto que se reputan requisitos complementarios en el ámbito de su actuación, aquéllos que si bien no son indispensables para que el **órgano jurisdiccional** que se constituya pueda funcionar, también lo es que resultan necesarios para que dicho tribunal revista tal denominación y son los que a continuación se apuntan:

- 1.- Que se garantice su autonomía, independencia e imparcialidad;
- 2.- Que se constituya en forma permanente para el fin que fue creado;
- 3.- Que tenga un lugar o sede específico de funcionamiento;
- 4.- Que sus resoluciones tengan la fuerza de cosa juzgada y
- 5.- Que esas resoluciones puedan ser ejecutadas por sí o por autoridades designadas en la ley respectiva.

Pasemos pues, a analizar cada uno de ellos de manera detallada.

Por cuanto hace al primer requisito constitucional consistente en que *sea estructurado y organizado por las constituciones locales y las leyes expedidas por las legislaturas de los Estados*, tiene por objeto establecer las bases generales del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, dejándole a los Municipios la facultad de emitir reglamentos, que, entre otras cosas, organicen la administración pública municipal y regulen sus procedimientos de conformidad con las leyes que para tal efecto expida la legislatura local a la cual pertenecen.

Es importante resaltar lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia correspondiente a la contradicción de tesis 26/2003, dictada en fecha 25 de abril de 2003, en la cual se exponen y desarrollan los fundamentos, motivos y circunstancias por las cuales no puede ser considerado el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, Coahuila, como un verdadero tribunal administrativo. Igualmente, mediante diversa sentencia de fecha 22 de octubre de 2004, dictada dentro de los autos que integran la contradicción de tesis número 147/2004, la Segunda Sala del más Alto Tribunal de Justicia, arribó a la misma conclusión, entratándose del Tribunal Municipal de Tijuana.

A fin de dejar claramente establecida la posición interpretativa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este punto que se analiza, a continuación, se transcriben las jurisprudencias que derivaron de las citadas contradicciones de tesis, las cuales son al tenor siguiente:

TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, COAHUILA. SUS RESOLUCIONES DEFINITIVAS (COLEGIADAS O UNITARIAS) SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 20, determinó que de conformidad con los artículos 73, fracción XXIX-H, 116, fracción V y 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que facultan al Congreso de la Unión, a las Legislaturas Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respectivamente, para crear tribunales de lo contencioso-administrativo con plena autonomía para dictar sus fallos, para que una autoridad administrativa, al realizar funciones jurisdiccionales, tenga la naturaleza de tribunal administrativo y, por ende, sus resoluciones sean susceptibles de reclamarse en amparo uniinstancial, se requiere: a) Que sea creado, estructurado y organizado mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas Locales; b) Que el

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar con el fin de garantizar su imparcialidad e independencia; y, c) Que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. En congruencia con lo antes expuesto, y del análisis de las disposiciones relativas de la Constitución Política del Estado de Coahuila y Código Municipal de esa entidad federativa, así como del Reglamento de Justicia Municipal de Torreón, se concluye que el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, Coahuila (integrado por el Juzgado Colegiado Municipal y los Juzgados Unitarios Municipales), reviste la característica de autoridad para efectos del amparo, en virtud de que sus resoluciones gozan de unilateralidad, por las que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, pero no tiene el carácter de "tribunal administrativo" para la procedencia del amparo directo en contra de sus resoluciones, pues si bien es cierto que su función es la de dirimir conflictos entre el Municipio o sus funcionarios y los particulares, también lo es que aun cuando su creación deriva del Código Municipal, su estructura y organización no están previstas en ley, sino en un reglamento expedido por el Ayuntamiento de Torreón en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Carta Magna, en correlación con el artículo 67, fracción XXX, de la Constitución Local y el Código Municipal aludido; en su integración y funcionamiento no es autónomo, pues el Juzgado Colegiado, que hace las veces de segunda instancia, está integrado por funcionarios del Ayuntamiento, que originariamente tienen asignadas funciones específicas dentro del gobierno, por las que reciben un salario, lo cual genera un nexo de dependencia con aquél, además de que el Presidente del Tribunal y los Jueces Unitarios son designados por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal; tampoco se encuentra garantizada la permanencia de los Jueces municipales, ya que durarán en el cargo el tiempo que constitucionalmente permanezca el Ayuntamiento que los nombró, aunque el Presidente del Tribunal pueda ser ratificado, ya que no existe garantía objetiva de ello. En consecuencia, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, debe reconocerse a los Juzgados Colegiados o Unitarios, que conforman el Tribunal de Justicia Municipal, el carácter de autoridad distinta de los

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y los procedimientos que observan en los conflictos que dirimen por disposición legal -resueltos en forma definitiva-, se pueden reconocer como procedimientos seguidos en forma de juicio a que alude el dispositivo citado, pues los preceptos que los regulan prevén la presentación de una demanda, su contestación, la posibilidad de ofrecer pruebas y rendir alegatos, y el dictado de un fallo, los cuales constituyen elementos similares a los de un juicio; por tanto, sea que las violaciones se hayan cometido en el procedimiento o en la propia resolución, el amparo promovido contra los fallos definitivos dictados por dicho órgano municipal de manera colegiada o unitaria debe tramitarse en la vía indirecta ante el Juez de Distrito. IUS 2005. Registro No. 184256.

TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. SUS RESOLUCIONES DEFINITIVAS SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO. Para que las sentencias de los tribunales municipales de lo contencioso administrativo, cuya existencia prevé el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puedan ser reclamables en amparo directo, es necesario que la función jurisdiccional que aquellos ejerzan al dirimir las controversias de su competencia se lleve a cabo con plena autonomía e independencia, características de que carece el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana, Baja California, ya que si bien es cierto que el artículo 46 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, estatuye como regla general que los Ayuntamientos instituirán en su reglamento un órgano de lo contencioso administrativo con autonomía y definitividad en su resoluciones, también lo es que conforme al artículo 6o. del Reglamento de Justicia para el Municipio de Tijuana, Baja California, dicho tribunal no tiene la función de dirimir conflictos entre la administración pública municipal y los particulares, con plena autonomía, sino la de conocer del recurso de revisión respecto de las resoluciones que las dependencias emitan con motivo del recurso de reconsideración y que, asimismo, conocen en segunda instancia de las resoluciones de los Jueces

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Municipales respecto del recurso de inconformidad; además, según el artículo 33 del ordenamiento últimamente citado, sus resoluciones favorables a los particulares son impugnables a través del procedimiento de lesividad ante el Ayuntamiento, el cual adoptará la resolución definitiva que corresponda. A lo anterior debe agregarse que el titular del tribunal es nombrado por el propio Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, ocupará el cargo por el mismo periodo que aquél y podrá ser removido en cualquier momento por causa justificada. En consecuencia, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, debe concluirse que el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana, Baja California, **carece de autonomía e independencia** y, por tanto, sus resoluciones, ya sea por violaciones cometidas en el procedimiento o en la propia resolución, deben ser impugnadas en amparo indirecto. IUS 2005. Registro No. 179149.

Haciendo una ilación de los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes apuntados, en relación con lo resuelto en la controversia constitucional 46/2002, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en contra del Poder Legislativo del mismo estado, por la omisión en la expedición de las disposiciones legales en materia municipal sobre las bases de procedimientos administrativo, incluyendo medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias la administración pública municipal y los particulares, el suscrito, en fecha 09 de marzo de 2006 y ratificadas el día 10 del mismo mes y año, presentó dos iniciativas de ley, ante la oficialía de partes del H. Congreso del Estado de Nuevo León, consistentes la primera, en reformar la fracción XLV del artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y los artículos 169 y 170 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León y la segunda, referente a la Ley de Justicia Contencioso Administrativa para los Municipios del Estado de Nuevo León, para permitir el establecimiento de los tribunales municipales de lo contencioso administrativo que cumplan con los requisitos de existencia a fin de que sean dichos órganos jurisdiccionales municipales considerados verdaderos

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

tribunales para los efectos del amparo directo y que sus sentencias sean revisadas en alzada a través de los Tribunales Colegiados de Circuito, asimismo, que dichos órganos jurisdiccionales sean considerados como órganos constitucionales autónomos estatales.

Lo anterior, se hizo con el fin de adecuar la Constitución estatal y los ordenamientos secundarios al espíritu de la reforma al inciso a) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en consecuencia, lograr una verdadera autonomía municipal que contenga tanto las funciones como las atribuciones que le otorga y concede el pacto federal.

Finalmente, como último requisito constitucional, a nuestra consideración, se tiene que *su función sea exclusivamente la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares*, característica que se refiere a que el objeto del proceso administrativo que se lleve a cabo por los órganos jurisdiccionales administrativo municipales es el de resolver las controversias y los conflictos que se susciten entre la administración pública municipal y los particulares exclusivamente; es decir, es uno de los medios de defensa con que cuenta el gobernado para defenderse de un acto lesivo de la autoridad municipal.

Del análisis realizado con antelación se concluye que los requisitos complementarios para establecer un verdadero tribunal contencioso administrativo municipal son a saber los siguientes:

primero, que se garantice su autonomía, independencia e imparcialidad;
segundo, que se constituya en forma permanente para el fin que fue creado;
tercero, que tenga un lugar o sede específico de funcionamiento;
cuarto, que sus resoluciones tengan la fuerza de cosa juzgada; y
quinto, que esas resoluciones puedan ser ejecutadas por sí o por las autoridades designadas en la ley respectiva.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

En este sentido solo existe un Tribunal Contencioso Administrativo que reúne todas las características aquí apuntadas para actuar como un verdadero tribunal y lo es el Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, del Estado de Yucatán, el cual entro en funciones el 16 de enero del 2016.

B. Repercusiones que en caso de llegar a aprobarse la iniciativa

En caso de llegase a aprobar la presente iniciativa, se estaría cumplimiento con lo estipulado por la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 6 y 10 de junio del 2011, y se estaría proporcionando a los gobernados de este Ayuntamiento de una tutela judicial efectiva, relacionada con los principios rectores del debido proceso, en consecuencia nos encontraríamos conforme a los estándares internacionales de impartición de justicia municipal, aunado que daríamos cumplimiento a lo establecida en nuestra Constitución Estatal y con lo preceptuado en la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, aspectos que ninguno de los municipios del Estado de Jalisco ha realizado de una forma más completa ya que dichos municipios lo han dejado de lado una reforma tan completa como la que hoy se propone, lo que nos permitirá ponernos a la altura de los municipios de los países que conforman la Unión Europea como son El Tribunal Económico Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, Tribunal Contencioso Administrativo y Fiscal Municipal del Ayuntamiento de Alicante, por solo nombrar algunos del país Español.

Por otro lado, de aprobarse la presente iniciativa, se evitarían las controversias que se han venido suscitando en la capital del estado, relacionada con los diversos juicios contenciosos administrativos en que se ha visto involucrado en municipio de Guadalajara, Zapopan por solo nombrar algunos, mismo que han perdido y ha provocado una enorme pérdida económica para el ayuntamiento tapatío y zapopano.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Por lo que con la presente iniciativa en caso de aprobarse, todas y cada una de las multas interpuestas por el funcionado jurisdiccional que se dice como titular del Tribunal Contencioso Administrativo irían a parar a la tesorería municipal y no a otra entidad de la Administración Pública del Estado.

Aunado a lo anterior y lo más importante se establecería en el Municipio de Puerto Vallarta, un refuerzo mayúsculo al Estado de Derecho Municipal y con ello al estado democrático de dicho municipio.

Por lo que se considera factible la creación de un Tribunal Contencioso Administrativo, solicitando a este Honorable Cabildo Municipal emitir el Acuerdo de Creación del mismo, por lo que propongo el presente Acuerdo de Creación y Reglamento Orgánico del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

TITULO PRIMERO

De la Organización y Competencia

CAPITULO I

De la Organización e Integración

Artículo 1.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, es un órgano jurisdiccional con autonomía y jurisdicción plena para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Esta Reglamento es de orden público e interés general y determina las normas de integración, organización, atribuciones, funcionamiento y procedimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta.

Artículo 2.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal se compondrá de una Sala integrada por un Magistrado. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, a juicio de este Tribunal, se formarán Salas Auxiliares, que tendrán la competencia que esta ley les otorga.

Artículo 3.- El nombramiento del Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Puerto Vallarta, se hará en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 1º., 2º., del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

El Magistrado será nombrado por el Presidente Municipal de Puerto Vallarta sujeto a la ratificación por el Cabildo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Durará seis años en el ejercicio de su encargo, salvo que fueran expresamente ratificados al concluir ese periodo. Si fueran ratificados, duraran un periodo más de seis años y sólo podrán ser privados de sus cargos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al término del periodo para el cual hubieran sido nombrados, los Magistrados que no sean ratificados, deberán entregar formal y materialmente su cargo y su ponencia al Magistrado que al respecto se designe con el fin de asegurar la continuidad de las funciones de la ponencia respectiva.

Artículo 4.- Para ser Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, se requiere:

- a) Ser mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
- b) Tener por lo menos, treinta y cinco años cumplidos;
- c) Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional debidamente registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado;
- d) Acreditar, cuando menos, cinco años de práctica profesional en materia administrativa y fiscal;
- e) Gozar de buena reputación;
- f) No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y
- g) No haber sido suspendido o inhabilitado por más de tres meses como servidor público.

Artículo 5.- Será causa de retiro forzoso de los Magistrados haber cumplido sesenta y cinco años de edad o que sobrevenga incapacidad física o mental para desempeñar el cargo.

Artículo 6.- El Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, percibirá iguales emolumentos y prestaciones de los que correspondan a un Director General o su similar de la Administración Pública del Honorable Ayuntamiento, mismos que serán fijados anualmente en el Presupuesto de Egresos del Tribunal Contencioso Administrativo de Puerto Vallarta, que para en el ejercicio fiscal correspondiente sea aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Esos emolumentos y prestaciones, no podrán ser disminuidos durante el término de su encargo, de conformidad a lo establecido por el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

El presupuesto anual para el correcto y debido funcionamiento del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal, será elaborado por el Magistrado presidente de dicho tribunal, el cual será presentada a mas tardar hasta la primera quincena de diciembre para que sea aprobado por el cabildo en la última sesión anual del mismo.

Artículo 7.- El Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, deberá otorgar la protesta de Ley ante el pleno del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Vallarta. En los recesos de ésta, la protesta la podrá tomar el presidente Municipal en representación de Honorable Ayuntamiento.

Artículo 8.- El presidente del Tribunal será suplido en sus faltas temporales por el Secretario de Acuerdos de dicho tribunal, y en caso de faltas temporales de este, será suplido en sus ausencias por el secretario de estudio y cuenta, Quienes al momento de la suplencia tendrán la misma responsabilidad como si fuesen los titulares de dicho tribunal, lo que no les exime de responsabilidad alguna.

Si la falta del Magistrado es definitiva, ocupará su cargo provisionalmente el Secretario General de Acuerdo de dicho tribunal, en los términos del párrafo anterior, informando lo conducente al Presidente Municipal, quien convocará a sesión extraordinaria del Cabildo para que este a su vez realice la convocatoria respectiva para ocupar el puesto vacante, en un período que no excederá de 30 días naturales, para que elija al que concluirá el año calendario de que se trate, al término del cual y en la primera sesión del año siguiente, se procederá en términos del artículo 7 del presente Reglamento.

En tanto se hace la designación correspondiente del nuevo Magistrado toma posesión de su cargo; el pleno del Cabildo designará un suplente de entre los

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Secretarios que conforman dicho tribunal, quien mientras realice la función señala percibirá su haber como si fuera titular de dicho tribunal y previo acuerdo de Cabildo.

Artículo 9.- El Magistrado del Tribunal deberá informar por escrito al Presidente Municipal de Puerto Vallarta con tres meses de anticipación, la fecha en que concluirá el término para el que fue designado o que cumplirá la edad, señalada por este reglamento; y tratándose de faltas definitivas por renuncia, fallecimiento, incapacidad física o mental, o cualquier otra causa, deberá notificarle en cuanto obtenga el documento respectivo o la certificación oficial del caso.

Artículo 10.- Las licencias de los Servidores públicos del Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, serán otorgadas por el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta hasta por treinta días con goce de sueldo o hasta por un año sin goce de sueldo, durante todo el periodo de su cargo, siempre que el Magistrado tenga dos años de servicio, exista causa justificada para ello y no se perjudique el funcionamiento del Tribunal. En caso de que se le conceda dicha licencia y el Magistrado llegase a ocupar algún cargo público, administrativo o de elección popular, sea de la Federación, de un Estado, de un Municipio, quedará separado definitivamente de su cargo de Magistrado, y se deberá dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 8 del presente reglamento.

El total de las licencias concedidas al Magistrado no podrá exceder de un año calendario dentro de un periodo de seis años.

Artículo 11.- El Tribunal tendrá un Secretario General de Acuerdos, un Secretario de Estudio y Cuenta, Oficiales Administrativos necesarios y Actuarios necesarios para el despacho de los negocios del Tribunal y demás personal, de conformidad con el Presupuesto del mismo.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Los Secretarios Generales de Acuerdos, los Secretarios de Estudio y Cuenta, y los Actuarios tendrán fe pública en el desempeño de su encargo.

Artículo 12.- El ingreso o promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, con excepción de los Magistrados, se hará mediante concurso con sujeción a los lineamientos que al efecto se expidan en el Estatuto del Servicio Civil de Carrera Jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, considerando los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, honestidad y antigüedad según el caso, éstos se sustentarán en el mérito, la igualdad de oportunidades y desarrollo permanente.

Artículo 13.- La designación del Secretario de Acuerdos y Actuarios del Tribunal, se efectuará por el Cabildo del Ayuntamiento, conforme a las disposiciones que establezca el Reglamento Interior del Tribunal, quienes tendrán fe pública en el desempeño de sus funciones.

El Secretario de Estudio y Cuenta, oficiales administrativos y demás personal que integra el Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, serán designados por el Magistrado, y de conformidad a las disposiciones que para el efecto se señalen.

Artículo 14.- El Secretario General de Acuerdos, el Secretario de Estudio y Cuenta, deberán ser mexicanos, mayores de 25 años, Licenciados en derecho y/o Abogados, con título debidamente registrado, con experiencia por lo menos de dos años en materia administrativa o fiscal, notoria buena conducta y no haber sido

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

condenados por sentencia irrevocable por delito doloso, así como no haber sido suspendido, destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público.

Los Actuarios deberán ser Licenciados en Derecho y/o abogados, y reunir los demás requisitos establecidos en el párrafo anterior. Para los Oficiales Administrativos no es requisito indispensable contar con la experiencia, pero si contar con estudios o encontrarse estudiando carreras afines con la actividad legal y jurídica.

Artículo 15.- El Magistrado, Secretarios Generales de Acuerdos, Secretarios de Estudio y Cuenta, Actuarios, estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo administrativo de la Federación, Ciudad de México, Estados, Municipios, Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal o de naturaleza privada, excepto los cargos o empleos de carácter académico que no se contrapongan al horario del Tribunal, y los honoríficos. También estarán impedidos para ejercer su profesión, salvo en causa propia, o de su familia en primer grado.

Artículo 16.- Los conflictos de competencia que se susciten entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta y Tribunales de la Federación, de los Estados, se incluye al Estado de Jalisco o de algún otro Municipio, se resolverán conforme a lo dispuesto por el artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 17.- Las relaciones de trabajo entre el Tribunal y sus trabajadores de base, se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Para efectos de este Reglamento, son trabajadores de confianza los Magistrados, Secretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta, Actuarios, Oficiales Administrativos Jurisdiccionales y los demás mandos medios y superiores que con ese carácter mencione el Reglamento Interior y se encuentren previstos en el presupuesto autorizado.

Para todos los efectos de las relaciones de trabajo, el Presidente del Tribunal será el representante de la Institución.

TITULO SEGUNDO

Del Procedimiento

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 18.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este Reglamento. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, será supletorio la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco, al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, respetando en todo momento y en cualquier acto jurisdiccional los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados Internacionales que el Estado Mexicano sea parte, así como la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que haya sido parte el Estado Mexicano.

En tratándose del acto administrativo municipal, se sujetará a las reglas y disposiciones del Título Primero y del Título Segundo de la Sección Primera de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los que originen las diligencias que promuevan.

Únicamente habrá lugar a condena en costas a favor de la autoridad demandada, cuando se controvertan resoluciones con propósitos notoriamente dilatorios.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que el actor tiene propósitos notoriamente dilatorios cuando al dictarse una sentencia que reconozca la validez de la resolución impugnada, se beneficia económicamente por la dilación en el cobro, ejecución o cumplimiento, siempre que los conceptos de impugnación formulados en la demanda sean notoriamente improcedentes o infundados. Cuando la ley prevea que las cantidades adeudadas se aumentan con actualización por inflación y con alguna tasa de interés o de recargos, se entenderá que no hay beneficio económico por la dilación.

La autoridad demandada deberá indemnizar al particular afectado por el importe de los daños y perjuicios causados, cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trata. Habrá falta grave cuando:

I. Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en cuanto al fondo o a la competencia.

II. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la contestación no hay falta grave.

III. Se anule con fundamento en el artículo 106, fracción VI de este Reglamento.

La condenación en costas o la indemnización establecidas en los párrafos segundo y tercero de este artículo se reclamará a través del incidente respectivo, el que se tramitará conforme lo previsto por el cuarto párrafo del artículo 42 de este Reglamento.

Artículo 19.- Toda promoción incluyendo la demanda, deberá ser firmada por quien la formule, requisito sin el cual se tendrá por no presentada. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, otra persona firmará a su ruego y el interesado estampará su huella dactilar.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Artículo 20.- Ante el Tribunal no procederá la gestión oficiosa o de negocios. Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar previamente que la representación le fue otorgada en términos de Ley, a más tardar en la fecha de presentación de la demanda o de la contestación en su caso.

Cuando tenga acreditada su personalidad ante la autoridad demandada, ésta le será reconocida en el juicio, siempre que así lo pruebe.

La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas y órganos encargados de su defensa jurídica, en términos de la legislación aplicable; así como por sus apoderados legales, representación que deberán acreditar al contestar la demanda.

Artículo 21.- Las diligencias que deban practicarse en el Municipio de Puerto Vallarta, fuera del recinto del Tribunal, se encomendarán a los Secretarios de Acuerdos o a los Actuarios del propio Tribunal.

Artículo 22.- Las demandas, contestaciones, informes y en general toda clase de actuaciones, deberán escribirse en español y estar firmados por quienes intervengan en ellos. Los documentos redactados en otro idioma, deberán acompañarse con la correspondiente traducción al español. En las actuaciones judiciales, las fechas y cantidades se escribirán con letra, y no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose al final del documento con toda precisión el error cometido.

Artículo 23.- En ningún caso se entregarán los autos a las partes para que los lleven fuera del Tribunal. La frase "dar vista" sólo significa que los autos quedan en la Secretaría para que se impongan de ellos los interesados.

Artículo 24.- Cuando las leyes o los reglamentos establezcan algún recurso u otro medio de defensa, será optativo para la persona física o moral agotarlo o interponer el juicio ante el Tribunal. Si está haciendo uso de dicho recurso o medio de defensa, previo el desistimiento correspondiente, podrá ocurrir a juicio ante el Tribunal, dentro del plazo previsto por este ordenamiento. El ejercicio de la acción ante este Órgano Jurisdiccional, extingue el derecho para promover otro medio de defensa.

Artículo 25.- El Magistrado para hacer cumplir sus determinaciones o para mantener el buen orden en su ponencia y en general, en el recinto del Tribunal, podrán emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio;

- I. Apercibimiento o amonestación;
- II. Expulsión de la Sala, de la parte o de su representante legal, que altere el orden;
- III. Multa de 30 a 180 veces el salario mínimo vigente en el Estado de Jalisco;
- IV. Auxilio de la fuerza pública; y
- V. Arresto hasta por 24 horas.

Artículo 26.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a la condenación en costas.

Artículo 27.- El Tribunal no admitirán promociones o solicitudes, incluyendo recursos, notoriamente frívolos o improcedentes; los que se desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte.

Artículo 28.- El pago no admitido de una contribución por la autoridad fiscal, podrá ser consignado por el contribuyente, mediante escrito dirigido a este Tribunal,

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

acompañando cheque certificado o de caja a nombre de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, y el "Formato respectivo de la Tesorería", en el que aparezca la determinación del crédito.

Recibido por este Órgano Jurisdiccional y/o por el Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, éste lo remitirá a la autoridad fiscal municipal en el término de dos días hábiles a partir de su recepción, en el caso que no reúna los requisitos señalados en el párrafo anterior, se prevendrá por única ocasión, a efecto de que se subsanen la deficiencias, para lo cual contará con un término de tres días hábiles, si fuere omiso o no cumpliere con lo requerido se tendrá por no hecha la consignación, ordenando la devolución de los documentos presentados.

Artículo 29.- El Tribunal resolverá los juicios de lesividad en un plazo máximo de seis meses y otorgará, a solicitud de la autoridad promovente, la suspensión de las actividades del particular ejecutadas al amparo del acto de cuya lesividad se trate, siempre que de continuarse con los mismos se afecte el entorno urbano, el medio ambiente, la debida prestación de servicios públicos o la seguridad de las personas.

CAPITULO II

De las Partes

Artículo 30.- Serán partes en el procedimiento:

I.- El actor;

II.- El demandado. Tendrán este carácter:

a) El Presidente Municipal de Puerto Vallarta, los Secretarios del Ramo, los Directores Generales; Directores, así como las autoridades administrativas del Municipio de Puerto Vallarta que emitan el acto administrativo impugnado;

b) Los Titulares de las Delegacionales Municipales, y en general las autoridades de las Delegaciones, emisoras del acto administrativo impugnado;

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

- c) Las autoridades administrativas del Municipio de Puerto Vallarta, tanto ordenadoras como ejecutoras de las resoluciones o actos que se impugnen;
- d) Los Titulares de los Organismos Públicos Descentralizados del Ayuntamiento de Puerto Vallarta;
- e) La persona física o moral a quien favorezca la resolución cuya nulidad sea demandada por la autoridad administrativa, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento; y
- f) La Administración Pública Municipal Paraestatal y Descentralizada cuando actúen con el carácter de autoridad;

III.- El tercero interesado, o sea, cualquier persona cuyos intereses puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal, o que tenga un interés contrario o incompatible con la pretensión del demandante.

Artículo 31.- Solo podrán intervenir en el juicio las personas que tengan interés legítimo en el mismo.

En los casos en que el actor pretenda obtener sentencia que le permita realizar actividades reguladas, deberá acreditar su interés jurídico mediante la correspondiente concesión, licencia, permiso, autorización o aviso.

Artículo 32.- Las partes podrán autorizar para recibir notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. Las personas autorizadas quedan facultadas para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, formular alegatos y pedir aclaración de Sentencia.

Si son varios los actores, los terceros interesados o las autoridades, deberán designar a sus respectivos representantes comunes que estarán facultados para actuar en los términos del párrafo anterior.

La representación en juicio terminará en el momento de la revocación del nombramiento respectivo, por fallecimiento del representado, o en su caso, hasta que haya sido ejecutada la sentencia correspondiente.

CAPITULO III

De los Incidentes

Artículo 33.- Sólo serán de previo y especial pronunciamiento que suspendan la tramitación del juicio, los incidentes siguientes:

- I. Acumulación de autos;
- II. Nulidad de notificaciones; e
- III. Interrupción del procedimiento.

Los incidentes ajenos al negocio principal o notoriamente frívolos e improcedente, deberán ser desechados por el Magistrado, pudiendo imponer a quien lo promueva una multa de diez a cincuenta veces el salario mínimo vigente en el Estado de Jalisco.

El procedimiento se interrumpirá por así requerirlo alguna autoridad jurisdiccional o ministerial, porque hayan cesado los efectos de la representación en términos del artículo 32 de esta Ley.

Artículo 34.- Procede la acumulación de dos o más juicios pendientes de resolución, en los casos en que:

- I. Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios;
- II. Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios, el acto impugnado sea uno mismo o se impugnen varias partes del mismo acto; e

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

III. Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugnen actos que sean antecedentes o consecuencia de los otros.

Artículo 35.- Las partes podrán hacer valer el incidente de acumulación, hasta antes de que se celebre la audiencia de ley, pudiendo también tramitarse de oficio. El incidentista debe señalar él o los juicios que pretenda se acumulen.

Artículo 36.- La acumulación se tramitará ante el Magistrado solicitará los expedientes respectivos a efecto de analizar la procedencia de la acumulación.

En caso de que la acumulación sea procedente, los juicios acumulados se resolverán en una sola sentencia, y la acumulación se resolverá dentro de los cinco días siguientes, que le sean remitidos los autos del juicio o de los juicios cuya acumulación haya sido solicitada. Esta petición deberá ser acordada dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 37.- Cuando no pueda resolverse la acumulación porque en alguno de los juicios se hubiere celebrado la audiencia de pruebas y alegatos, o por encontrarse en diversas instancias, a petición de parte o de oficio se decretará la suspensión del procedimiento en el juicio en trámite. La suspensión subsistirá hasta que se pronuncie la resolución definitiva en el otro asunto.

Artículo 38.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en este Reglamento, o en su caso, de acuerdo con las disposiciones supletorias, serán nulas.

El perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad en la actuación siguiente en la que intervenga, o bien, dentro del término de cinco días computados a partir del día siguiente, al que surta efectos la notificación posterior que sea practicada

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

legalmente, si dentro de dicho término no se presenta actuación en la que intervenga el perjudicado, se entenderá legalmente hecha la notificación irregular.

Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de tres días hábiles para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución.

Si se declara la nulidad de la notificación, el Tribunal ordenará la reposición del procedimiento a partir de la notificación anulada. Asimismo amonestará al Actuario. En caso de reincidencia, por tres veces en un periodo de tres meses, el Actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Tribunal.

Artículo 39.- La impugnación de falsedad de un documento puede hacerse valer hasta antes de que se celebre la audiencia de ley, debiéndose indicar los motivos y las pruebas que se ofrezcan.

Cuando se impugne la autenticidad de los documentos privados o públicos sin matriz, deberá señalarse los documentos indubitables para el cotejo y promoverse la prueba pericial correspondiente. Sin estos requisitos, se desechará el incidente.

En caso de que se impugne la autenticidad o exactitud de un instrumento público, siguiéndose las formalidades establecidas para la prueba de inspección judicial se señalará día y hora para que se coteje con los protocolos y archivos en donde se halle la matriz, practicándose el cotejo por el Actuario que se comisione al efecto, o por el Secretario de Acuerdos, cuando así lo determine el Magistrado.

El Tribunal resolverá sobre la autenticidad del documento, exclusivamente para los efectos del juicio en el que se haya promovido el incidente.

Artículo 40.- La reposición de autos se substanciará incidentalmente. El Secretario de Acuerdos certificará la existencia anterior y falta posterior del expediente o de la actuación.

Cuando la pérdida ocurra encontrándose los autos a disposición de este Tribunal, se ordenará a la proceda a la reposición de autos y una vez integrado el expediente, se remitirá para la resolución del juicio.

Artículo 41.- La interrupción del juicio por causa de muerte, incapacidad o declaratoria de ausencia del actor, la disolución o la quiebra, durará como máximo un año y se sujetará a lo siguiente:

I. Se decretará por el Magistrado a partir de la fecha en que éste tenga conocimiento de la existencia de los supuestos a que se refiere el presente artículo; y

II. Si transcurrido el plazo máximo de interrupción, no comparece el albacea, el representante legal o el tutor; el Magistrado acordará la reanudación del juicio, ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista autorizada.

Artículo 42.- Todos los incidentes se tramitarán por escrito. Con la promoción que le dé inicio, se dará vista por tres días a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Las pruebas deberán ofrecerse, en su caso, en el escrito respectivo. Todas las disposiciones sobre prueba en el juicio, son aplicables a los incidentes, en lo que no se opongan a este capítulo.

CAPITULO IV

De las Notificaciones y de los Términos

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Artículo 43.- Las partes, en el primer escrito que presenten, deberán señalar domicilio en el Municipio de Puerto Vallarta, para que se hagan las notificaciones personales a que se refiere esta Ley.

Las notificaciones que se realicen a las autoridades o a personas morales por conducto de su Oficialía de Partes u Oficina de recepción, se entenderán legalmente efectuadas, si en el documento correspondiente obra el sello de recibido.

Las notificaciones personales podrán hacerse en el local del Tribunal, si éstas no se han efectuado.

Artículo 44.- Las notificaciones se harán personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, tratándose de los siguientes casos:

- I. A la actora, el acuerdo que recaiga a su escrito de demanda;
- II. A la demandada y al tercero interesado, el auto que ordene el emplazamiento con el traslado del escrito de demanda, como de la ampliación en su caso, así como el de preclusión;
- III. A las partes el acuerdo donde se señale el día y hora de la celebración de la audiencia de ley y de la sentencia definitiva;
- IV. A la parte no apelante, el acuerdo que admita el recurso de apelación; y
- V. En todos aquéllos casos en que el Magistrado así lo ordene.

Artículo 45.- Las notificaciones personales se harán por lista autorizada previa razón del Actuario, cuando:

- I. Las partes no señalen domicilio dentro del territorio del Municipio de Puerto Vallarta;
- II. No exista el domicilio señalado para recibir notificaciones;

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

- III. Exista negativa a recibirlas en el domicilio señalado;
- IV. Si dejando citatorio para la práctica de la notificación, éste es ignorado y
- V. Si no se hace saber al Tribunal el cambio de domicilio.

Artículo 46.- Las notificaciones que deban hacerse a las partes y que no deben ser personales, se harán por lista autorizada que se fijará en lugar visible del local de la Sala, a las doce horas.

La lista contendrá nombre de la persona, expediente y tipo de acuerdo. En los autos se hará constar la fecha de la lista.

Artículo 47.- Las notificaciones se harán a las autoridades administrativas siempre por oficio.

Tratándose de las autoridades administrativas, las resoluciones que se dicten en los juicios que se tramiten ante el Tribunal Contencioso Administrativo Municipal de Puerto Vallarta, deben notificarse en todos los casos, únicamente a la Unidad Administrativa a la que corresponda la representación en juicio.

Artículo 48.- Las notificaciones personales de los acuerdos y resoluciones se efectuarán a más tardar, dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que se turnen al Actuario y las que deban ser por lista autorizada, dentro de los tres días hábiles siguientes. Si la notificación no se efectúa dentro de los términos no será motivo de anulación de la misma

Artículo 49.- Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios contencioso administrativos regulados por esta Ley, todos los días del año, con excepción de los sábados y domingos, 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del día 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en

conmemoración del día 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 16 de septiembre, 12 de octubre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del día 20 de noviembre y 25 de diciembre, así como aquéllos en los que se suspendan las labores por acuerdo de del Tribunal o por determinación de otras disposiciones legales. Durante los períodos vacacionales o de suspensión de labores, se podrán habilitar estos días.

Artículo 50.- Las notificaciones se harán en días y horas hábiles, con una anticipación de tres días hábiles por lo menos, al momento en que deba efectuarse la actuación o diligencia a que se refieran las mismas.

Artículo 51.- La notificación omitida o irregular se entiende hecha a partir del momento en que, a quien deba de notificarse se haga sabedor de la misma, salvo cuando se promueva su nulidad.

Artículo 52.- El término para interponer la demanda, en contra de los actos o resoluciones de las autoridades a que se refiere la presente Ley, es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se impugne o del día siguiente al en que se hubiera tenido conocimiento u ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución.

Cuando mediante el juicio de lesividad se demande la nulidad de una resolución favorable a una persona, la demanda deberá presentarse dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que sea notificada la resolución, salvo que se hubiesen generado efectos de tracto sucesivo, caso en el cual la autoridad podrá demandar la nulidad en cualquier época, pero los efectos de la sentencia, en caso de nulificarse la resolución favorable, sólo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.

Artículo 53.- Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar el juicio, el término se suspenderá hasta un año, si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión.

En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación.

Artículo 54.- Cuando la Ley no señale plazo para la práctica de alguna actuación, éste será de tres días hábiles.

Artículo 55.- El cómputo de los términos se sujetará a las reglas siguientes:

- I. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquél en que fueron practicadas. En los casos de notificaciones por lista se tendrá como fecha de notificación la del día en que se hubiese fijado en los estrados.
- II. Comenzarán a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; serán improrrogables y se incluirán en ellos el día del vencimiento; y
- III. Los términos se contarán por días hábiles.

Artículo 56.- Los Actuarios tendrán fe pública únicamente en cuanto concierne a la práctica de las notificaciones y diligencias a su cargo. Cuando las notificaciones personales se hagan en el domicilio señalado para tal efecto por las partes, el Actuario deberá cerciorarse de que se trata del domicilio correspondiente, y hecho lo anterior, buscará a quien deba notificar y/o a su representante legal o persona autorizada para ello, a quien entregará la copia del auto o resolución a notificar, debiendo señalar en el acuse correspondiente la fecha y hora en que se efectúe la diligencia, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda dicha

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

notificación. Si ésta se niega a firmar se hará constar tal circunstancia en el acta respectiva, sin que afecte su validez.

Artículo 57.- Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada, con su representante legal o con la persona autorizada para ello, a falta de éstos, el Actuario dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que se le espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si éste se encontrare cerrado o no estuviera persona alguna que respondiera al llamado del Actuario para atender la diligencia, el citatorio se dejará mediante instructivo que se deje pegado en la puerta.

Artículo 58.- Si la persona a quien haya que notificarse no atiende el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de no acudir persona alguna al llamado del Actuario o si el domicilio se encontrare cerrado, la notificación se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de esta ley. De estas circunstancias, el Actuario asentará la razón respectiva en acta que para tal efecto levante.

Artículo 59.- En caso de que por circunstancias extraordinarias o ajenas a las partes no sea posible efectuar las notificaciones personales en la forma señalada en los artículos que anteceden, el Magistrado atendiendo a las circunstancias de las mismas, ordenará en su caso, se efectúen éstas por lista autorizada, para evitar dilaciones procesales.

CAPITULO V

De los Impedimentos

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Artículo 60.- Los Magistrados, el Secretario de Estudio y Cuenta y el Secretario de acuerdos se encuentran impedidos para actuar, y deben excusarse en los juicios en que se presenten los siguientes supuestos:

I. Si son cónyuges, parientes consanguíneos o afines de las partes en línea recta sin limitación de grado; o dentro del cuarto grado, en lo colateral por consanguinidad o dentro del segundo, en lo colateral por afinidad; o bien, de sus representantes legítimos o de las personas por ellos autorizadas;

II. Si tuviera interés personal en el asunto;

III. Si han sido apoderados, patronos, representantes o autorizados de cualquiera de las partes en el mismo asunto;

IV. Si tuvieran amistad o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes o sus representantes;

V. Si han intervenido en la formulación o emisión del acto impugnado o en la ejecución del mismo;

VI. Si han conocido del asunto en primera instancia; y

VII. Los demás que señale el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco.

Incurren en responsabilidad el Magistrado, los Secretarios de Estudio y Cuenta o el Secretario de Acuerdos que estando impedidos para intervenir en un negocio no se excusen.

Artículo 61.- El Magistrados, el Secretarios de Estudio y Cuenta y el Secretarios de Acuerdos que se consideren impedidos para conocer de algún negocio, presentarán la manifestación respectiva. Dejando constancia para ello.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Artículo 62.- El impedimento base de la excusa, se calificará por el Tribunal en el acuerdo en que se dé cuenta del mismo. El manifestante podrá participar en las deliberaciones más no así en la decisión que se pronuncie.

Artículo 63.- Las partes podrán recusar al Magistrado, Secretarios de Estudio y Cuenta o Secretarios de Acuerdos, por cualquiera de las causas a que se refiere el artículo 60. La recusación se hará valer ante el Magistrado, la que decidirá en los términos del presente reglamento.

La recusación se promoverá mediante escrito que se presente ante el Tribunal, en el que se aporten las pruebas documentales en que se funde la petición, sin que sea admisible ningún otro medio de prueba.

Al recibir el escrito que contenga la recusación, el Magistrado del Tribunal solicitará al recusado rinda un informe dentro de los tres días siguientes. A falta de informe se presumirá cierto el impedimento.

Si el Magistrado considera fundada la recusación, el recusado será substituido en los términos de esta Ley.

Si se trata del Magistrado del Tribunal, el mismo deberá de abstenerse de conocer del asunto.

Si se declarare infundada la recusación interpuesta, el Magistrado, decidirá de acuerdo con su prudente arbitrio si hubo mala fe por parte de quien la haya hecho valer, y en tal caso, le impondrá una sanción consistente en multa por el importe de diez a cincuenta veces el salario mínimo vigente en el Estado de Jalisco en la fecha que se haya impuesto la recusación.

CAPITULO VI

Demanda y Contestación

ARTÍCULO 64.- La demanda deberá interponerse por escrito dirigido al Tribunal y deberá llenar los siguientes requisitos formales:

- I. Nombre del actor o en su caso, de quien promueva en su nombre;
- II. Señalar domicilio para recibir notificaciones dentro del Municipio de Puerto Vallarta;
- III. Señalar los actos administrativos que se impugnan;
- IV. Señalar la autoridad o autoridades demandadas. Cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa, el nombre y domicilio de la persona demandada;
- V. Nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere;
- VI. La pretensión que se deduce;
- VII. La manifestación bajo protesta de decir verdad de la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento del o los actos administrativos que se impugnan;
- VIII. La descripción de los hechos;
- IX. Los conceptos de nulidad;
- X. La firma del actor, si éste no supiere o no pudiese firmar, lo hará un tercero a su ruego, poniendo el primero su huella digital; y
- XI. Las pruebas que se ofrezcan.

Las pruebas deben ofrecerse relacionándolas con toda claridad, cuáles son los hechos que se tratan de probar con las mismas, así como las razones por las que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones, declarando en su caso en los términos anteriores el nombre y domicilio de testigos y peritos.

Cuando se omitan los datos previstos en las fracciones I y X de este artículo, el Magistrado tendrá por no interpuesta la demanda.

Cuando se omitan los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los señale, así como las pruebas, dentro del plazo de cinco días siguientes a partir de que surta efectos la notificación del auto correspondiente, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo, se desechará la demanda, salvo que no se cumpla con el requisito previsto en la fracción XI en cuyo caso se tendrán por no ofrecidas las pruebas. Por lo que hace al requisito de la fracción II, si no se señala domicilio para recibir notificaciones estas se harán por lista.

Artículo 65.- El actor deberá adjuntar a su demanda:

- I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes;
- II. El documento que acredite su personalidad, y si ésta ya fue reconocida por la autoridad el documento en el que conste;
- III. El documento en que conste el acto impugnado o, en su caso, copia donde conste el sello de recepción de la instancia no resuelta por la autoridad, salvo cuando se demande la nulidad de las resoluciones verbales;
- IV. El cuestionario a desahogar por el perito, el cual debe ir firmado por el demandante;
- V. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante; y,
- VI. Las pruebas documentales que ofrezca.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente

se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentran, para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando esta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada, por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias.

Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado prevendrá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, se desechará la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones IV a VI de este artículo, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

Artículo 66.- Después de la demanda y contestación, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, no se admitirán al actor ni al demandado, respectivamente, otros documentos que los que se hallen en alguno de los casos siguientes:

- I. Ser de fecha posterior a dichos escritos;
- II. Los de fecha anterior, respecto de los cuales, manifieste bajo protesta decir verdad, no haber tenido conocimiento de su existencia; y
- III. Los que no haya sido posible obtener con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte interesada, y siempre que los haya solicitado dentro del término señalado en el artículo anterior.

Artículo 67.- Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las reglas siguientes:

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra su notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo conoció.

En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación;

II. Si el particular manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda.

El Tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación del acto administrativo.

Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se considerará que el actor fue sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II de este artículo, quedando sin efectos todo lo actuado en base a aquélla, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se hubiere formulado contra dicho acto.

Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, se sobreseerá el juicio en relación con el acto administrativo combatido.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Artículo 68.- Se podrá ampliar la demanda, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:

- I. Cuando se impugne una afirmativa o negativa ficta;
- II. Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación;
- III. En los casos previstos por el artículo anterior;
- IV. Cuando en la contestación, se introduzcan cuestiones que no sean conocidas por el actor al presentar la demanda y
- V. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda.

En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos, que en su caso se presenten.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 65 de esta Reglamento.

Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el Magistrado requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones IV, V y VI del artículo 65 de esta ordenamiento, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Artículo 69.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada; asimismo la admitirá, prevendrá o en los siguientes casos la desechará:

I.- Si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia

II.- Si siendo oscura o irregular y prevenido el actor para subsanarla, en el término de cinco días no lo hiciere; la oscuridad o irregularidad subsanables, sólo versarán respecto de los requisitos a que se refieren las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 65.

Contra los autos de desechamiento a que se refiere este artículo, procede el recurso de reclamación.

Artículo 70.- No encontrándose irregularidades en la demanda, o subsanadas éstas, el Magistrado mandará emplazar a las demás partes para que contesten dentro del término de quince días, que será el mismo término para la contestación a la ampliación de la demanda. El término para contestar correrá para las partes individualmente.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como demandada, el Magistrado de oficio ordenará, se le corra traslado de la demanda y sus anexos para que conteste en el término a que se refiere el primer párrafo de este precepto.

Artículo 71.- En el mismo acuerdo de admisión, el Magistrado admitirá o desechará las pruebas ofrecidas; admitida la prueba pericial o testimonial se señalará fecha para su desahogo.

Artículo 72.- El demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda expresará:

- I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar;
- II. Las consideraciones que a su juicio impidan se emita decisión en cuanto al fondo, o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda;
- III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso;
- IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestre la ineficacia de los conceptos de nulidad; y
- V. Las pruebas que ofrezca.

Cuando se omita cumplir con lo señalado en la fracción V de este artículo, el Magistrado requerirá a la autoridad demandada para que las señale y exhiba dentro del plazo de cinco días siguientes a partir de que surta efectos la notificación del auto correspondiente, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo, se tendrán por no ofrecidas las pruebas.

Artículo 73.- Todas las pruebas que se ofrezcan en el juicio deberán estar relacionadas con los hechos que se pretendan probar.

Tratándose de la prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos. Sin estos requisitos se desecharán dichas pruebas.

Artículo 74.- El demandado deberá adjuntar a su contestación:

- I. Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y para el tercero interesado señalado en la demanda, si lo hubiere;

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

- II. El documento en que acredite su personalidad en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
- III. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandado;
- IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida por el demandante; y
- V. Las pruebas documentales que ofrezca.

Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar también los documentos previstos en este artículo, excepto aquéllos que ya se hubieran acompañado al escrito de contestación de la demanda.

Si no se adjuntan las copias o el documento a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, el Magistrado requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si éste no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la contestación a la demanda o la ampliación en su caso. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a los peritos a que se refieren las fracciones III y V las mismas se tendrán por no ofrecidas.

Artículo 75.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos del acto impugnado.

En caso de resolución negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho en que se apoya la misma.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

En la contestación de la demanda o hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada.

Artículo 76.- Si la parte demandada no contestara dentro del término señalado para ello, el Magistrado declarará la preclusión correspondiente considerando confesados los hechos salvo prueba en contrario.

Artículo 77.- El Magistrado examinará el expediente, y si encontrare alguna causal de improcedencia evidente o de sobreseimiento, desechará de plano la demanda intentada.

CAPITULO VII

De la Suspensión

Artículo 78.- La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser acordada por el Magistrado que conozca del asunto, haciéndolo del conocimiento inmediato de las autoridades demandadas para su cumplimiento.

Artículo 79.- La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo.

Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución.

No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés público o si se contravinieren disposiciones de orden público.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio real del predio, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio a terceros.

Artículo 80.- El Magistrado podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes.

Cuando se solicite la suspensión para la realización de actividades reguladas, que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso y el actor no exhiba dicha documental no se otorgará la misma.

Artículo 81.- En contra del incumplimiento de las autoridades a la suspensión concedida, procederá la queja ante el Tribunal. La suspensión podrá ser revocada cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó.

Artículo 82.- Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión, debiéndose garantizar su importe ante la Tesorería del Ayuntamiento de Puerto Vallarta en alguna de las formas y con los requisitos previstos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y del Reglamento de Responsabilidades Hacendarias del Municipio de Puerto Vallarta.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido.

Artículo 83.- En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio.

Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía mediante billete de depósito o fianza.

Artículo 84.- La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da a su vez garantía con billete de depósito o fianza. En este caso se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de la suspensión y procederá el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable.

Para que surta efecto la garantía que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor.

Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión o contra el señalamiento de fianzas y contra fianza, procede el recurso de reclamación ante el Tribunal.

Artículo 85.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión a que se refieren los artículos 82 y 83, el interesado deberá solicitarlo ante el Magistrado dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia, la cual dará vista a las demás partes por un término de cinco días y

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la sentencia que corresponda. Contra la resolución procede el recurso de reclamación ante la Sala Superior.

CAPITULO VIII

De las Pruebas

Artículo 86.- Los actos y resoluciones de las autoridades se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niega lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

Artículo 87.- El Magistrado podrá ordenar hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, requerir la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia que considere pertinentes cuando se requieran cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes.

Artículo 88.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, regirá el principio de litis abierta; serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesión de las autoridades mediante absoluciones de posiciones, salvo los informes que se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya celebrado la audiencia de ley. En éste caso se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de tres días exprese lo que ha su derecho convenga.

Artículo 89.- El Magistrado podrá acordar de oficio el desahogo de las pruebas que estime conducentes o acordar la práctica de cualquier diligencia para la mejor

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

decisión del asunto, notificando oportunamente a las partes a fin de que puedan intervenir, si así conviene a sus intereses.

Artículo 90.- El Magistrado podrá ordenar en todo tiempo la repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que lo estime necesario. Los hechos notorios no requieren prueba.

Artículo 91.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los derechos correspondientes, las copias certificadas de los documentos que les soliciten; si no se cumpliera con esa obligación la parte interesada solicitará al Magistrado que requiera a los omisos.

Cuando sin causa justificada la autoridad demandada no expida las copias de los documentos ofrecidos por el demandante para probar los hechos imputados a aquélla y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados con toda precisión tanto en sus características como en su contenido, se presumirán ciertos los hechos que pretenda probar con esos documentos.

En los casos en que la autoridad requerida no sea parte e incumpla, el Magistrado podrá hacer valer como medida de apremio la imposición de una multa por el monto equivalente de entre cincuenta y cien veces el salario mínimo vigente en el Estado de Jalisco, al funcionario omiso. También podrá comisionar al Secretario o Actuario que deba recabar la certificación omitida u ordenar la compulsión de los documentos exhibidos por las partes, con los originales que obren en poder de la autoridad.

Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en la práctica administrativa normal, las autoridades podrán solicitar un plazo adicional

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

para realizar las diligencias extraordinarias que el caso amerite y si al cabo de éstas no se localizan, el Magistrado presumirá ciertos los hechos que pretenda probar con esos documentos.

Artículo 92.- Cuando se trate de pruebas obtenidas por medio de equipos y sistemas tecnológicos por parte del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, las mismas se apreciarán y valorarán en términos del Reglamento Interno en Materia de Tecnologías de la Información y Gobierno Electrónico del Honorable Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

Artículo 93.- La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones relativas a alguna ciencia o arte. Los peritos deberán acreditar que cuentan con título en la ciencia, arte o industria, a que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados.

Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados, o estándolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombrados cualesquiera personas entendidas, aún cuando no tengan título.

Artículo 94.- Al ofrecerse la prueba pericial, las partes presentarán los cuestionarios sobre los que los peritos deberán rendir su dictamen en la audiencia respectiva.

En caso de discordia, el perito tercero será designado por el Magistrado. Dicho perito no será recusable, pero deberá excusarse por alguna de las causas siguientes:

- I. Consanguinidad hasta dentro del cuarto grado con alguna de las partes;
- II. Interés directo o indirecto en el litigio; y

III. Tener amistad estrecha o enemistad manifiesta, o tener relaciones de índole económico con cualquiera de las partes.

Artículo 95.- La prueba pericial se sujetará a lo siguiente:

I. En el auto que recaiga a la contestación de la demanda o de su ampliación, se requerirá a las partes para que dentro del plazo de diez días, presenten sus peritos a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal desempeño, apercibiéndolas de que si no lo hacen sin justa causa, o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos de Ley, sólo se considerará el peritaje de quien haya cumplimentado el requerimiento;

II. El Magistrado cuando, a su juicio, deba presidir la diligencia y lo permita la naturaleza de ésta, señalará lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial, pudiendo requerir a los peritos todas las aclaraciones que estime conducentes y exigirles la práctica de nuevas diligencias;

III. En los acuerdos por los que se discierna en su cargo a cada perito, el Magistrado le concederá un plazo máximo de quince días para que rinda su dictamen, con el apercibimiento a la parte que lo propuso de que únicamente se considerarán los dictámenes rendidos dentro del plazo concedido;

IV. Por una sola vez, por la causa que lo justifique y antes de vencer los plazos mencionados en este artículo, las partes podrán solicitar la sustitución de su perito, señalando el nombre y domicilio de la nueva persona propuesta. La parte que haya sustituido a su perito conforme a la fracción I de éste artículo ya no podrá hacerlo en el caso previsto en la fracción III de este precepto; y

V. El perito tercero será designado por el Magistrado. En el caso de que no hubiere perito en la ciencia o arte sobre el cual verse el peritaje, el Magistrado designará bajo su responsabilidad a la persona que debe rendir dicho dictamen y las partes cubrirán sus honorarios. Cuando haya lugar a designar perito tercero

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

valuador, el nombramiento deberá recaer en una institución fiduciaria, debiendo cubrirse sus honorarios por las partes.

Artículo 96.- Los testigos, que no podrán exceder de tres por cada hecho, deberán ser presentados por el oferente.

Sin embargo cuando estuviere imposibilitado para hacerlo, lo manifestará así bajo protesta de decir verdad y pedirá que se les cite. El Magistrado ordenará la citación con apercibimiento de arresto hasta por veinticuatro horas y de no comparecer o de negarse a declarar, se le impondrá una multa de 1 a 15 veces el salario mínimo vigente en el Estado de Jalisco.

En caso de que el señalamiento de domicilio de algún testigo resulte inexacto o de comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de retardar el procedimiento, se impondrá al oferente una multa de 1 a 30 veces el salario mínimo vigente en el Estado de Jalisco, en el momento de imponerse la misma, debiendo declararse desierta la prueba testimonial.

Cuando los testigos tengan su domicilio fuera del Municipio de Puerto Vallarta, se podrá desahogar la prueba mediante exhorto, previa calificación hecha por el Magistrado del interrogatorio presentado, pudiendo repreguntar el Magistrado o Juez que desahogue el exhorto. Para diligenciar el exhorto el Magistrado podrá solicitar el auxilio de algún Juez o Magistrado del Poder Judicial del Fuero Común o del Tribunal Administrativo Local que corresponda al domicilio del testigo.

Artículo 97.- La prueba de inspección ocular, se practicará el día, hora y lugar que se señale en el acuerdo, de conformidad con los puntos que se señalen por el oferente, previa calificación que se haga en el acuerdo respectivo, a la que podrán concurrir las partes y hacer las observaciones que estimen pertinentes; del

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

reconocimiento se levantará acta, que firmarán los que concurren, asentándose los puntos que lo provocaron, las observaciones y todo lo necesario para esclarecer la verdad.

Artículo 98.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones:

I. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, la inspección ocular, las presuncionales legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridades en documentos públicos, pero, si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado;

II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán como legalmente afirmados los hechos que consten en las actas respectivas; y

III. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como las demás pruebas quedará a la prudente apreciación del Tribunal.

Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el Tribunal adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia.

CAPITULO IX

De la Improcedencia y Sobreseimiento

Artículo 99.- El juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta es improcedente:

I. Contra actos o resoluciones de autoridades que no sean del Municipio de Puerto Vallarta;

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

II. Cuando las autoridades del Ayuntamiento actúen como Autoridades Federales, o bien auxiliando a estas o algunas del Estado de Jalisco;

III. Contra actos o resoluciones del propio Tribunal;

IV. Contra actos o resoluciones que sean materia de otro juicio o medio de defensa pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y el mismo acto administrativo, aunque las violaciones reclamadas sean distintas;

V. Contra actos o resoluciones que hayan sido juzgados en otro juicio o medio de defensa, en los términos de la fracción anterior;

VI. Contra actos o resoluciones que no afecten los intereses legítimos del actor, que se hayan consumado de un modo irreparable o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos aquéllos contra los que no se promovió el juicio dentro de los plazos señalados por esta Ley;

VII. Contra reglamentos, circulares o disposiciones de carácter general, que no hayan sido aplicados concretamente al promovente;

VIII. Cuando de las constancias de autos apareciere fehacientemente que no existen las resoluciones o actos que se pretenden impugnar;

IX. Cuando hubieren cesado los efectos de los actos o resoluciones impugnados, o no pudieren producirse por haber desaparecido el objeto del mismo;

X. Contra actos o resoluciones que deban ser revisados de oficio por las autoridades administrativas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, y dentro del plazo legal establecido para tal efecto; y

XI. En los demás casos en que la improcedencia esté establecida en algún otro precepto de esta Ley.

Las causas de improcedencia son de estudio preferente, deberán quedar probadas plenamente y se analizarán de oficio o a petición de parte.

Artículo 100.- Procede el sobreseimiento del juicio:

- I. Cuando el demandante se desista del juicio;
- II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
- III. Cuando el demandante falleciere durante la tramitación del juicio, si el acto impugnado sólo afecta su interés;
- IV. Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor o revocado el acto que se impugna;
- V. Si el juicio queda sin materia; y
- VI. Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de ciento veinte días naturales, ni el actor hubiere promovido en ese mismo lapso.

Procederá el sobreseimiento en el último caso, si la promoción no realizada es necesaria para la continuación del procedimiento.

CAPITULO X

De la Audiencia

Artículo 101.- La audiencia tendrá por objeto desahogar en los términos de este Reglamento las pruebas ofrecidas y oír los alegatos correspondientes, quedando prohibida la practica de dictarlos. La falta de asistencia de las partes, no impedirá la celebración de la audiencia.

Artículo 102.- Presente el Magistrado, éste se constituirá en audiencia pública el día y hora señalados al efecto. A continuación el Secretario llamará a las partes, peritos, testigos y demás personas que por disposición del Reglamento deban intervenir en la audiencia, y el Magistrado determinará quiénes deberán permanecer en el recinto y quiénes en lugar separado para llamarlos en su oportunidad.

CAPITULO XI

De las Sentencias

Artículo 103.- La sentencia se pronunciará por el Magistrado de este Tribunal, dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que se celebre la audiencia de ley.

Artículo 104.- El Magistrado al pronunciar sentencia, suplirá las deficiencias de la demanda, sin analizar cuestiones que no fueron hechas valer. En todos los casos se contraerá a los puntos de la litis plantea.

En materia fiscal se suplirán las deficiencias de la demanda siempre y cuando de los hechos narrados se deduzca el concepto de nulidad.

Artículo 105.- Las sentencias que emitan el Tribunal, no necesitan formulismo alguno, pero deberán contener:

- I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hubieren admitido, según el prudente arbitrio del Magistrado. Las documentales públicas e inspección judicial que siempre harán prueba plena en los términos de este Reglamento;
- II. Los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlos a los puntos cuestionados y a la solución de la litis planteada;
- III. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o cuya nulidad se declare; y
- IV. Los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad demandada, así como el plazo correspondiente para ello, que no excederá de quince días contados a partir de que la sentencia quede firme.

Artículo 106.- Se declarará que una resolución administrativa es nula cuando se demuestre alguna de las siguientes causas:

I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.

III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.

IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.

V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley o reglamento confiera dichas facultades.

VI. Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera otra causa similar.

Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes:

a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden.

b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse.

c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados.

e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsión a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados.

f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el acta de visita o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos.

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, el Tribunal al emitir su sentencia, deberá examinar primero aquéllas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución o acto administrativo impugnado.

El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.

Artículo 107.- La sentencia definitiva podrá:

- I. Reconocer la validez del acto impugnado.
- II. Declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado;
- III. Declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales; y
- IV. Sobreseer el juicio en los términos de Ley.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o a iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo no mayor de quince días contados a partir de que la sentencia quede firme.

Siempre que se esté en el supuesto previsto en la fracción III de este artículo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita un nuevo acto; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales.

Artículo 108.- Cuando alguna de las partes estime que la sentencia es contradictoria, ambigua u obscura, podrá promover por una sola vez su aclaración dentro de los cinco días siguientes a la notificación. La aclaración no admite recurso alguno y se reputará parte de la sentencia, la que debe de resolver en un plazo de cinco días siguientes a la fecha en que sea interpuesta. La aclaración de sentencia podrá hacerse de oficio, dentro del mismo plazo que las partes tienen para promoverla.

Artículo 109.- Causan ejecutoria por ministerio de ley las sentencias pronunciadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta así como las dictadas en los juicios tramitados en la vía sumaria a que se refiere el Capítulo XV del presente Título Segundo.

CAPITULO XII

Del Cumplimiento de la Sentencia

Artículo 110.- En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá, por una sola vez, acudir en queja, ante el Magistrado, el que dará vista a la autoridad responsable para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Se interpondrá por escrito ante el Magistrado, en dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o bien, se expresará la omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate.

El Magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Tribunal resolverá si la autoridad ha cumplido con los términos de la sentencia, de lo contrario, la requerirá para que cumpla en un término de otros cinco días, amonestándola y previniéndola de que en caso de renuencia se le impondrá una multa de cincuenta a ciento ochenta veces el salario mínimo vigente en el Estado de Jalisco.

CAPITULO XIII

De los Recursos

Artículo 111.- El recurso de reclamación es procedente en contra de las providencias o acuerdos de trámite dictados por el Presidente del Tribunal. También procederá en contra de los acuerdos que desechen la demanda o las pruebas, y concedan o nieguen la suspensión.

Artículo 112.- El recurso de reclamación se interpondrá con expresión de agravios, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación correspondiente, ante el Magistrado que dicto el acuerdo recurrido. El Magistrado suplirá las deficiencias de los agravios expresados en el recurso, pero no su ausencia.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Artículo 113.- El recurso se substanciará corriendo traslado a las demás partes, por un término de tres días hábiles, para que expongan lo que a su derecho convenga.

Transcurrido dicho término, el Tribunal resolverá lo conducente.

Artículo 114.- Contra las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, a que se refiere el artículo anterior, las autoridades podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente por conducto de este Tribunal, mediante escrito dirigido a dicho Tribunal dentro del término de 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, en los casos siguientes:

- I. Cuando la resolución que se dicte afecte el interés fiscal o el patrimonio del Ayuntamiento de Puerto Vallarta;
- II. Cuando se trate de la interpretación de leyes o reglamentos;
- III. Cuando se trate de las formalidades esenciales del procedimiento;
- IV. Cuando se fije el alcance de los elementos constitutivos de las contribuciones;
- V. Por violaciones procesales cometidas durante el juicio siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo; o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias;
- VI. Cuando el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar tal circunstancia;
- VII. Cuando se trate de resoluciones en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o del reglamento municipal que resulte aplicable; y
- VIII. Cuando el valor del negocio exceda de 7,000 veces el salario mínimo vigente en el Estado de Jalisco, al momento de emitirse la resolución de que se trate.

CAPITULO XIV

De la Jurisprudencia

Artículo 115.- Las tesis sustentadas en las sentencias pronunciadas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, constituirán precedente.

Artículo 116.- Para fijar jurisprudencia, el Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta deberá aprobar tres precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario.

Artículo 117.- La resolución que pronuncie el Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, en los casos a que este artículo se refiere, sólo tendrá efectos para fijar jurisprudencia y no afectará las resoluciones dictadas en los juicios correspondientes.

Artículo 118.- El Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta podrá interrumpir o modificar una jurisprudencia, cuando en una sentencia, resuelva en sentido contrario a la tesis de la jurisprudencia. Dicha interrupción o modificación deberá publicarse.

Los Magistrados el Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta podrá proponer la interrupción de una jurisprudencia, cuando existan razones fundadas que lo justifiquen.

Artículo 119.- El Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta y los juzgados municipales están obligados a aplicar la jurisprudencia del Tribunal, salvo que ésta contravenga la jurisprudencia del Poder Judicial Federal.

CAPÍTULO XV

DEL JUICIO EN LA VÍA SUMARIA

Artículo 120.- El juicio contencioso administrativo a que se refiere este Reglamento se tramitará y resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se establecen en este Capítulo y, en lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones de este Reglamento.

Artículo 121.- Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de 720 veces el salario mínimo vigente en el Estado de Jalisco al momento de su emisión, procederá el Juicio en la vía Sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:

- I. Las dictadas por autoridades del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;
- II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas vigentes en el Municipio de Puerto Vallarta;
- III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;
- IV. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la impugnada sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.

Para determinar la cuantía en los casos de las fracciones I, II y III, sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones.

Cuando en un mismo acto se contenga más de una determinación de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

La demanda deberá presentarse por escrito dirigido al Tribunal, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada o del día siguiente al que se hubiera tenido conocimiento u ostentado sabedor del mismo o de su ejecución.

Artículo 122.- La tramitación del Juicio en la vía Sumaria será improcedente cuando:

- I. No se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 121;
- II. Se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos;
- III. Se trate de multas por infracciones a las normas en materia ambiental;
- IV. Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, incluyan alguna otra carga u obligación.

En estos casos, en el primer acuerdo que se dicte, el Magistrado determinará la improcedencia de la vía sumaria y ordenará que el juicio se siga conforme a las demás disposiciones de este Reglamento.

Contra la determinación de improcedencia de la vía sumaria, podrá interponerse el recurso de reclamación.

Artículo 123.- Una vez admitida la demanda, se correrá traslado al demandado para que la conteste dentro del término de diez días y emplazará, en su caso, al tercero, para que en igual término, se apersona en juicio.

En el mismo auto en que se admita la demanda, se fijará día y hora para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Dicha fecha no excederá de los veinte días siguientes al de emisión de ese auto.

Artículo 124.- El Magistrado proveerá la correcta integración del juicio, mediante el desahogo oportuno de las pruebas, a más tardar en la fecha prevista para la celebración de la audiencia.

Serán aplicables, en lo conducente, las reglas contenidas en el Capítulo VIII del Título Segundo de este Reglamento.

Por lo que toca a la prueba pericial, ésta se desahogará en los términos que prevé el artículo 95 de este Reglamento, con la salvedad de que todos los plazos serán de tres días, incluyendo el que corresponde a la rendición y ratificación del dictamen, en el entendido de que cada perito deberá hacerlo en un solo acto ante el Magistrado.

Artículo 125.- El actor podrá ampliar la demanda, en los casos a que se refiere el artículo 68 de este Reglamento, en un plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que tenga por presentada la contestación.

La parte demandada o en su caso el tercero, contestarán la ampliación a la demanda, en el plazo de cinco días siguientes a que surta efectos la notificación de su traslado.

En caso de omisión de los requisitos y documentos a que se refieren los artículos 64, 65, 68, último párrafo, y 74, último párrafo de este ordenamiento, las partes deberán subsanarla en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del requerimiento o prevención.

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

Artículo 126.- Los incidentes a que se refiere el presente reglamento, podrán promoverse dentro de los tres días siguientes a que surtió efectos la notificación del auto que tuvo por presentada la contestación de la demanda o, en su caso, la contestación a la ampliación.

El incidente de acumulación sólo podrá plantearse respecto de expedientes que se encuentren tramitándose en esta misma vía y con las características de los juicios previstas en este capítulo.

Los incidentes de nulidad de notificaciones y de interrupción del procedimiento, se deberán interponer dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que se conoció del hecho, respectivamente, y la contraparte deberá contestar la vista en igual término.

Artículo 127.- El recurso de reclamación a que se refiere el artículo 111 de este Reglamento, deberá interponerse dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del proveído o acuerdo correspondiente del Magistrado Instructor, y se tramitará en términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la misma.

Artículo 128.- La suspensión de los actos impugnados se tramitará conforme a las reglas generales establecidas en el Capítulo VII del Título Segundo de este reglamento.

Artículo 129.- En los casos de suspensión del juicio, por surtirse alguno de los supuestos contemplados para ello en este Reglamento, en el auto en que el Magistrado acuerde la reanudación del procedimiento, fijará fecha para la celebración de la audiencia, en su caso, dentro de los cinco días siguientes a

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

aquél en que haya surtido efectos la notificación a las partes de la reanudación del juicio.

Artículo 130.- Las partes podrán presentar sus alegatos por escrito antes de la fecha señalada para la audiencia.

Artículo 131.- En la fecha fijada para la audiencia, el Magistrado procederá a verificar si el expediente se encuentra debidamente integrado; en caso contrario, fijará nueva fecha para la celebración de dicha audiencia, dentro de un plazo máximo de diez días.

Artículo 132.- Una vez celebrada la audiencia de ley, la Sala pronunciará sentencia dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Artículo 133.- En contra de las sentencias que se dicten con motivo del juicio previsto en este capítulo, no procederá recurso alguno.

Artículo 134.- Si la sentencia ordena la reposición del procedimiento administrativo o realizar un determinado acto, la autoridad deberá cumplirla en un plazo que no exceda de quince días contados a partir de que dicha sentencia haya quedado firme de conformidad con el artículo que antecede.

Artículo 135.- A falta de disposición expresa que establezca el plazo respectivo en la vía sumaria, se aplicará el de tres días.

TRANSITORIOS

Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO.- Una vez publicado el presente ordenamiento, el Presidente Municipal contara con 30 días naturales, para que proponga una terna de los candidatos a ocupar el puesto de Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, quienes previamente tendrán que acreditar y reunir los requisitos establecidos en el artículo 4 del presente Reglamento.

Una vez presentada la terna ante el pleno del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, este, por mayoría simple, elegirá de entre los propuesto al que ocupara el cargo del Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal, quien hará la protesta de ley en términos del artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante dicha soberanía constitucional.

TERCERO.- Se ordena el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco y al encargado de los bienes de este Honorable ayuntamiento para que previos los trámites de ley, proporcione un inmueble adecuado para el debido funcionamiento del tribunal, dicho inmueble y recursos materiales le será entregado al Magistrado que al efecto sea designado, cuya propiedad de dichos bienes seguirá siendo de esta Honorable Ayuntamiento.

En este mismo entendido se proporcionarán al Magistrado los recursos financieros necesarios e indispensables para el adecuado funcionamiento y desarrollo de las actividades jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal de Puerto Vallarta.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, no entrara en funciones, si no hasta el primero de julio del dos mil dieciséis.

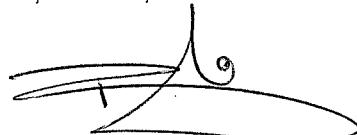
Iniciativa de creación del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, , así como su Reglamento Orgánico, que presenta la Regidora Bellanni Fong Patiño.

CUARTO.- Entre tanto se hacen las adecuaciones necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la Dirección de Recursos Humanos de este Honorable Ayuntamiento realizara los trámites necesarios para las altas del personal que integrara al personal que formara parte del Tribunal, cuya adscripción será el Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Puerto Vallarta, quienes se sujetaran a los requisitos que al efecto les requiera dicha dirección.

Atentamente

Salón de Sesiones del Cabildo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.

Puerto Vallarta, Jalisco, a 14 de Marzo de 2016.



Regidora. Bellanni Fong Patiño.